



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: CARLOS ALBERTO CORREA OBANDO
Demandados: ACP COLPENSIONES, SKANDIA S.A. y PORVENIR S.A.
Llama en garantía: MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
Radicado: 05001 31 05 013 2021 00240 01
Sentencia: S-029

AUTO

En atención a la escritura pública 721 del 23 de julio de 2020 allegada al expediente, así como la inscripción en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S., se le reconoce personería como apoderada judicial de SKANDIA S.A. a la Dra. JULIANA ARAQUE QUIROZ, portadora de la T.P. 293.693 del C. S. de la Judicatura.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por SKANDIA S.A. y PORVENIR S.A., así como a dar trámite al grado de CONSULTA que opera a favor de COLPENSIONES, con ocasión de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín el día 5 de julio de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

CARLOS ALBERTO CORREA OBANDO demandó a las entidades enunciadas, pretendiendo se declare la nulidad o ineficacia del traslado efectuado al RAIS por violación al deber objetivo de información y, en consecuencia, se declare que permaneció afiliada sin solución de continuidad en el Régimen de Prima Media, con la consecuente obligación para los fondos privados de devolver todos los conceptos recibidos y a COLPENSIONES a recibirlos y reactivar la afiliación. Adicionalmente, pretende el reconocimiento de las costas del proceso.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 2 de mayo de 1957; que estuvo afiliado y cotizando al Sistema General de Pensiones en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES desde el mes de enero de 1990, completando en esa entidad un total de 135.86 semanas; que en el mes de agosto de 1999 se trasladó a la AFP HORIZONTE S.A., hoy PORVENIR S.A.; que posteriormente se trasladó a la AFP SKANDIA S.A. en mayo de 2018; que esos traslados se produjeron por la campaña y publicidad que los fondos privados de pensiones iniciaron con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; que en ese momento su empleador facilitó la presencia de un promotor de PORVENIR S.A., quien bajo argumentos y promesas infundadas llevó a que suscribiera la afiliación a esa entidad y se trasladara de régimen pensional; que la omisión en la información y el engaño sufrido fueron determinantes para que se afiliara al RAIS; y que su solicitud de regreso al Régimen de Prima Media ha sido negada por las entidades demandadas.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, SKANDIA S.A. acepta la fecha de nacimiento del demandante y la afiliación a esa entidad, aclarando que no tiene conocimiento de lo ocurrido con otras entidades y por tanto no realiza pronunciamiento alguno. Se opuso a las pretensiones como quiera que el traslado de régimen se realizó de forma libre y voluntaria, cumpliendo con todas las exigencias establecidas en la ley y con conocimiento de todas las implicaciones de su decisión. Como excepciones propuso prescripción, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación.

PORVENIR S.A. señala de manera general que no le consta ninguno de los hechos de la demanda, indicando que cada uno de ellos deben ser probados en el curso del proceso y que de todas maneras los asesores de esa entidad le brindaron a la demandante las asesorías pertinentes para que la decisión de traslado de régimen pensional fuera libre, voluntaria e informada. Se opuso igualmente a las pretensiones de la demanda y como excepciones propuso prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación y compensación.

COLPENSIONES acepta lo relacionado con la fecha de nacimiento del demandante y su afiliación a esa entidad, indicando que no le consta lo demás por tratarse de situaciones ajenas a su conocimiento en las que no tuvo ninguna participación. Se opuso a las pretensiones de la demanda por carecer de fundamento fáctico y legal. Como excepciones propuso imposibilidad de que COLPENSIONES decrete la ineficacia y/o nulidad del traslado, inexistencia de la obligación, buena fe, imposibilidad de condena en costas, prescripción y compensación.

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

Por auto del 2 de diciembre de 2021 se admitió el llamamiento en garantía que la AFP SKANDIA S.A. formuló con respecto a la

aseguradora MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., la cual se ocupó de contestar tanto la demanda principal indicando no tener conocimiento de ninguno de los hechos planteados, como el llamamiento mismo, frente al cual manifestó que las pólizas de aseguramiento fueron expedidas de buena fe, las cuales cumplieron la finalidad de cubrir las eventualidades que se hubieran podido presentar derivadas de los riesgos de invalidez y sobrevivencia. Como excepciones propuso el contrato de seguro es autónomo y obligatorio, el Juez en sus decisiones debe respetar el imperio de la ley, la pretendida devolución de todo no puede comprender el importe de las primas devengadas, convalidación del acto, validez, cumplimiento y agotamiento del contrato de seguro, responsabilidad de SKANDIA, entre otras.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 5 de julio de 2022, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, i) DECLARÓ la ineficacia del traslado efectuado por el demandante al Régimen de Ahorro Individual administrado por PORVENIR S.A., así como el posterior traslado a SKANDIA S.A., ORDENÁNDOLE a ésta última trasladar a COLPENSIONES el saldo existente en su cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos financieros; ii) ORDENÓ a todas las AFP del régimen privado, la devolución de las cuotas de administración, primas de seguros y reaseguros y aportes al fondo de garantía de pensión mínima, recibidos durante el tiempo que el demandante estuvo afiliada a cada entidad junto con la respectiva indexación; iii) ORDENÓ a COLPENSIONES recibir las anteriores sumas y reactivar la afiliación del demandante al RPMPD; iv) ABSOLVIÓ a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. de las pretensiones el llamamiento en garantía; y v) CONDENÓ en costas a PORVENIR S.A. y SKANDIA S.A. y a favor del demandante fijando como agencias en derecho el equivalente a \$2`000.000 y a SKANDIA S.A. y a favor de MAPFRE por valor de \$1`000.000.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con lo decidido, el apoderado de PORVENIR S.A. interpuso recurso de apelación en cuanto a la orden de devolución de los gastos de administración y seguros previsionales debidamente indexados, ya que no hay una razón para ello toda vez que ya los recursos de la cuenta de ahorro individual del demandante ya fueron trasladados a SKANDIA; además, éstos conceptos también están llamados a ser descontados en el Régimen de Prima Media conforme lo establece el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, los cuales no están destinados a financiar la pensión de vejez y no pertenecen tampoco a los afiliados en ninguno de los dos regímenes pensionales. Agrega que la devolución de dichos dineros hacia COLPENSIONES generaría un enriquecimiento sin justa causa en favor de esa entidad al recibir unos conceptos que le pertenecen a PORVENIR S.A. por su excelente gestión de administración.

A su turno, el apoderado de SKANDIA S.A. señala que no comparte la sentencia de primera instancia ya que la Corte Suprema de Justicia ha ratificado que el simple traslado horizontal entre las administradoras de fondos de pensiones, no implica una convalidación del acto pero que dada ciertas circunstancias si lo pueden ser. El demandante manifestó en su interrogatorio de parte que aproximadamente hace 7 años tuvo conocimiento de la prohibición de traslado y sin embargo con posterioridad a esa situación lo que hizo fue trasladarse a otro fondo dentro del mismo régimen, lo que representa una particularidad que no se da en la gran mayoría de los casos y que sí es una prueba clara de la convalidación de la voluntad de permanecer en el RAIS.

En lo relativo a los gastos de administración y seguros previsionales, la Ley 100 de 1993 establece la naturaleza de dichos rubros, así como su destinación, sin que se pueda desconocer la gestión efectuada. Dice que en el RAIS ni en el RPM esos conceptos hacen parte del dinero para financiar una pensión de vejez lo que constituiría un

enriquecimiento sin causa para Colpensiones ya que nunca gestionó dichos dineros.

Por último, solicita se revoque la absolución de MAPFRE frente a las pretensiones del llamamiento en garantía, ya que SKANDIA no está en ningún momento invocando su propia culpa o dolo; lo que se dice es que por ministerio de la ley tuvo que suscribir un contrato para cubrir los seguros previsionales y esos dineros no los conserva la AFP sino Mapfre y si se declara la ineficacia como un acto que nunca existió, dicha ineficacia no sería únicamente frente a las AFP ya que jurídicamente no puede hablarse de una ineficacia parcial.

Conoce la Sala igualmente del asunto por **Consulta** a favor de COLPENSIONES.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término del traslado concedido a las partes, el apoderado de MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. solicitó confirmar la sentencia de primera instancia en lo referente a la improcedencia del llamamiento en garantía realizado.

SKANDIA S.A. señaló haber dado cumplimiento a cabalidad al deber de información que le era exigido para la fecha de traslado de régimen pensional del demandante, el cual se produjo de manera libre, voluntaria y consciente. De confirmarse la sentencia, no se puede desconocer su buena gestión de los recursos por lo que no puede ordenarse la devolución de los gastos de administración, además de que debe condenarse a MAPFRE al traslado de lo atinente a los seguros previsionales.

COLPENSIONES solicitó se revoque la sentencia de primera instancia o de manera subsidiaria se ordene la devolución de todos los conceptos recibidos por el fondo privado, incluyendo la respectiva indexación, tal

y como ha sido ordenado según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

CONSIDERACIONES:

Se procede a desatar los recursos de apelación interpuestos por las AFP PORVENIR S.A. y SKANDIA S.A. en contra de la sentencia de primera instancia, e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **i)** CARLOS ALBERTO CORREA OBANDO nació el 2 de mayo de 1957; **(ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el ISS y comenzó a realizar cotizaciones el 18 de enero de 1990, acumulando en esa entidad un total de 135.86 semanas; **(iii)** el 19 de agosto de 1999 suscribió el formulario de afiliación a la AFP PORVENIR S.A.; y **iv)** posteriormente se trasladó a la AFP SKANDIA S.A., según formulario de vinculación radicado el 20 de marzo de 2018, entidad en la que se encuentra afiliado actualmente.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de

que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993¹, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 273 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*

¹ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. Nº 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas del afiliado (a), con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquel pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte que le fuera practicado al afiliado, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información. Si bien pudo haber recibido algunas explicaciones generales acerca del funcionamiento del Régimen de Ahorro Individual y los rendimientos que generarían los aportes acumulados en su cuenta de ahorro individual, ello no significa una asesoría completa, clara, detallada y precisa de todos los alcances de su decisión y

mucho menos se deriva que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieron informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle al afiliado al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia, sin que tampoco sea de recibo el argumento planteado por la AFP SKANDIA S.A. relacionado con que el demandante se trasladó dentro del mismo RAIS, lo que demostraría su intención de permanecer en ese régimen. Y no lo es porque al respecto también se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de Casación Laboral en múltiples providencias como la SL 5280 del 3 de noviembre de 2021, rad. 85801 en la que sostuvo claramente que *“... los traslados posteriores de un afiliado no pueden convalidar la actuación viciada en el traslado inicial, y como se ratificó en la sentencia CSJ SL1688-2019, las falencias en el suministro de información completa, veraz y efectiva sobre las consecuencias de un traslado, que pueden ocasionar su ineficacia, se deben examinar en el momento mismo del traslado y no con posterioridad”*.

Conceptos a devolver.

De otro lado, en cuanto a la devolución de dineros distintos a los aportes obligatorios, tales como cuotas de administración, seguros

previsionales, porcentaje de garantía de pensión mínima u otros conceptos, basta con indicar que, siguiendo aquellos mismos pronunciamientos de la jurisprudencia laboral, esta Sala ha considerado que es factible ordenar a las AFP correspondientes, la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación fallida, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto las cosas vuelve a su estado anterior, como si el traslado nunca hubiera existido.

En tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias como la SL4964-2018, SL2877-2020, SL5595-2021 o SL1637-2022, lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia. (...)*

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”*

De otro lado, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en

establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cobija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado “... aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen...”.

Dijo además en esa providencia, que:

“Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal. (...)”

De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.”

En consecuencia, la decisión deberá ser CONFIRMADA.

Finalmente, en cuanto a la inconformidad de la AFP SKANDIA S.A. respecto de la orden devolución de los porcentajes de seguros previsionales, los cuales considera se deben imponer a cargo de la aseguradora, resulta que tampoco le asiste razón, en tanto es el incumplimiento al deber de información el que genera la consecuencia descrita de declarar la ineficacia del traslado, sin que ello nada hubiera tenido que ver la entidad aseguradora, y es así como el criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha sido que esa devolución de todos los conceptos que corresponden, debe hacerse por cada AFP con cargo a sus propios

recursos (Ver por ejemplo sentencia SL 3465 del 14 de septiembre de 2022).

Costas en esta instancia a cargo de SKANDIA S.A. y PORVENIR S.A. y a favor del demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1 '160.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el día 5 de julio de 2022.

Costas en esta instancia a cargo de SKANDIA S.A. y PORVENIR S.A. y a favor del demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1 '160.000.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **58c2c4fa388ae8e05f37f6186dd2d23b39b3dd3184349df9b8761d1f309ccca1**

Documento generado en 16/02/2023 02:23:06 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>